



Red Econolatin

www.econolatin.com

Expertos Económicos de Universidades Latinoamericanas

Nota prospectiva de Econolatin N° 5



Sebastián Monsalve Egaña

Investigador Asociado del Instituto de Estudios Internacionales/Universidad Arturo Prat (Chile).

Crisis política en Chile: del estallido social al conflicto político

Santiago de Chile, 30 de octubre de 2019

SITUACIÓN ACTUAL

El viernes 18 de octubre¹ se produjo el mayor estallido social en la historia reciente de Chile, que llevó al presidente Sebastián Piñera a decretar el “estado de emergencia”², transformando lo que era una simple “rebeldía estudiantil” ante el alza del pasaje de metro de Santiago en una crisis social de grandes proporciones, la que hoy en día se ha consolidado como un conflicto político en torno al modelo de desarrollo neoliberal en Chile.

La crisis ha tenido un fuerte impacto político, cambió completamente la agenda de discusión política y económica que se venía debatiendo. Un ejemplo es el proyecto de reforma tributaria que promovía el gobierno

¹ Si bien los actos de evasión organizada del pago del metro por parte de los estudiantes secundarios y su choque con fuerzas policiales empezaron varios días antes, el viernes 18 se da un salto cualitativo al interrumpir el funcionamiento del metro.

² El “estado de emergencia” es uno de los cuatro tipos de “estados de excepción constitucional”, (además de los estados de asamblea, de sitio y de catástrofe). El estado de emergencia se declara cuando hay situaciones de grave alteración del orden público y supone restringir el derecho de libertad de movilidad y el de reunión.

(buscaba la reintegración tributaria) y que había logrado dividir a la oposición, y que ha comenzado a ser puesto en cuestión tanto por parlamentarios oficialistas como ministros del gobierno³. Hasta el momento hay un solo gran “perdedor” en esta crisis y es el presidente Piñera, cuya popularidad ha bajado según las últimas encuestas al 14% (el peor registro en los 30 de transición democrática). Sin embargo, es difícil identificar un claro ganador, ya que hasta el momento la oposición política (desde la ex Nueva Mayoría hasta el Frente Amplio) no ha podido aprovecharse de la crisis.

Todos los intentos del gobierno por reaccionar ante la crisis han fracasado. Ni el anuncio de una “Agenda Social” (con la cual el presidente Piñera decía haber “escuchado las demandas”), ni el levantamiento del “estado de emergencia” (el domingo 27) ni tampoco la realización de un cambio de gabinete (lunes 28) han podido frenar la movilización social en las calles ni la paralización de las actividades académicas en universidades y escuelas secundarias y primarias (en Santiago y algunas regiones) y buena parte de la administración pública. Además, se han suspendido la realización de la cumbre de la APEC y la COP25, que eran los dos grandes eventos con el gobierno quería coronar el liderazgo internacional del presidente Piñera.

La evolución de la crisis desde que se inició hasta hoy en día ha sido un proceso muy dinámico en el cual se puede identificar diferentes fases:

a) “Estudiantil”: abarca desde las primeras protestas de estudiantes secundarios contra el alza al pasaje de metro (evasiones) hasta la noche del viernes 18. En este periodo se concentró en torno al metro de Santiago una gran tensión social que ese día terminó estallando con gran violencia, tanto por la represión policial a los estudiantes como por los posteriores “ataques” incendiarios a las estaciones del metro⁴.

b) “Pánico gubernamental”: abarca desde la declaración del “estado de emergencia” (a las 00:30 del sábado 19) hasta el martes 22 de octubre. En esta fase las protestas se expanden rápidamente a todo el resto del país (marchas, saqueos, corte de carreteras, etc.) y la reacción del gobierno es apostar por la represión convocando a los militares y estableciendo el “toque de queda” en Santiago y las principales ciudades del país.

c) “Agenda social”: abarca desde el martes 22, en que el presidente Piñera dice haber “escuchado” las demandas de la población y anuncia una serie de medidas económicas, hasta el viernes 25, en que se lleva a cabo la “gran marcha” en Santiago, logrando una convocatoria histórica (estimaciones del gobierno la cifran en más de un millón de personas).

d) “Pacificación”: abarca desde el viernes 25 (día de la “gran marcha”) hasta el lunes 28, en que se realiza el cambio de gabinete como intento dar la

³ Si bien el anterior ministro de Hacienda (Hernán Larraín) lo dio por descartado, el nuevo ministro (Ignacio Briones) pretende insistir con ese proyecto apelando a la necesidad de generar incentivos para atraer inversión extranjera que se habría “espantado” con la crisis.

⁴ De las 136 estaciones del Metro de Santiago hay 118 que presentan algún nivel de daño, de estas 7 fueron completamente incendiadas y 25 parcialmente. Los primeros cálculos estiman que el monto de los daños bordea los 380 millones de dólares (algo más de 340 millones de euros). Se está investigando por parte de la fiscalía los ataques incendiarios a las estaciones de metro, hay sospechas de haber sido ataques organizados y no simples turbas de gente como se pensó en un principio.

imagen de un nuevo aire al gobierno. En esta fase también se levanta el “estado de emergencia” y se retira a los militares de las calles.

e) “Resignación gubernamental”: abarca desde el lunes 28 (cambio de gabinete) hasta el miércoles 30, en que se anuncia la suspensión de las cumbres internacionales que se iban a realizar en Chile (APEC y COP25) y que eran la principal preocupación del gobierno este año como parte del intento de posicionar internacionalmente al presidente Piñera. Por ende, la suspensión de las cumbres marca una importante derrota política del gobierno y supone reconocer que la crisis no va a ser superada al corto plazo.

A partir del jueves 31 se inicia una nueva fase marcada principalmente por el inicio de un fin de semana largo (no laboral o con poca actividad laboral)⁵, lo que para el gobierno supone la esperanza de que la situación se relaje y, al contrario, para el movimiento social implica el desafío de continuar movilizado.

1.1) Antecedentes:

Desde el retorno de la democracia en 1990 no se había registrado un fenómeno de estas características y se asumía que dados los indicadores macroeconómicos (de los mejores en la región) no habría una conflictividad social por temas económicos. Si bien nadie presagiaba un estallido social de esta magnitud conviene tener en cuenta diversos antecedentes que contextualizan (pero no son necesariamente causales directas) este fenómeno. Los podemos ordenar en términos temporales.

a) Mediano plazo: Si bien durante el periodo de transición democrática (desde 1990) no se registraban fenómenos de la magnitud de este estallido social eso no significa que no haya habido conflictos sociopolíticos que hayan sorprendido completamente al gobierno de turno y a la “clase política”. Podemos mencionar tres: la “rebelión de los pingüinos⁶” de 2006 (primer gobierno de Michelle Bachelet), los paros universitarios de 2011 (primer gobierno de Sebastián Piñera) y las tomas feministas de 2018 (segundo gobierno de Sebastián Piñera). Ninguna de estas estaba presagiada y tomaron por sorpresa al mundo político, obligando a los gobiernos y a los partidos políticos a cambiar la agenda. En el caso de las “tomas feministas” incluso las propias organizaciones estudiantiles fueron sorprendidas y sobrepasadas por el conflicto. Es decir, en los últimos 15 años, la clase política chilena ha sido sorprendida por los movimientos sociopolíticos, lo que demuestra una falencia en la capacidad de representar a la sociedad y canalizar los conflictos sociales. Sin embargo, a diferencia de la actual situación, estos tres estaban centrados en el mundo de la educación y había actores, intereses y liderazgos relativamente claros (en el caso de las “tomas feministas” esto fue más difuso).

b) Corto plazo: Durante este año se ha verificado una creciente crispación social que se ha encarnado en diversos conflictos que ponían en cuestión la capacidad del gobierno para afrontarlos, por ejemplo la crisis del Instituto Nacional⁷ (con varios meses de violencia estudiantil y represión policial); las

⁵ En Chile el 31 de octubre y el 1 de noviembre son feriados.

⁶ Término coloquial con el que se identifica a los estudiantes de educación secundaria.

⁷ El Instituto Nacional “José Miguel Carrera”, ubicado en Santiago, es el establecimiento educacional público más antiguo de Chile (fundado en 1813). Es considerado como la cuna de la educación pública

crisis medioambientales en la zona costera de Quintero; críticas a las alzas unilaterales de los planes de salud privada (Instituciones de Salud Previsional, Isapre) y las bajas pensiones otorgadas por el sistema de pensiones privadas (Administraciones de Fondos de Pensión, AFP); oposición del gobierno al proyecto de rebajar a 40 horas semanales la jornada laboral; las alzas (casi un 10%) en el costo de la electricidad; los casos de corrupción en Carabineros y Ejército; entre otros. Todos estos casos afectan a diversos sectores de la población, que se empieza a sentirse víctima de abusos empresariales y de un gobierno que se muestra incapaz (o sin voluntad) de mejorar la situación de la gente.

A lo anterior hay que sumar los graves errores comunicacionales de varios ministros, no solo en relación al alza del pasaje de metro sino también a otras discusiones sobre política sociales, las que daban cuenta de una visión poco empática con las dificultades de la población⁸. Además, los mediocres resultados económicos del país, más allá de las razones externas esgrimidas por el gobierno (por ejemplo, la guerra comercial entre EEUU y China) ha instalado una sensación de pesimismo respecto a la situación futura de la economía. En este marco las medidas de austeridad presupuestaria del gobierno terminaron afectando al gasto público lo que se tradujo en un incremento del malestar social y en una baja de la popularidad del gobierno. Es en este contexto de un cúmulo de situaciones "abusivas", sumado a la mala gestión gubernamental, que un alza menor en el precio del metro terminó detonando una crisis política de grandes proporciones.

1.2) Principales factores políticos que han incidido en la evolución de la crisis

a) La pluralidad de actores movilizados: si bien el inicio de la crisis estuvo marcado por la acción de estudiantes secundarios que evadían el pago en el metro con el pasar de los días se han ido sumando gran cantidad de actores sociales, desde funcionarios públicos (de la salud, educación, administración del Estado, etc.) hasta organizaciones ambientalistas, al punto que hoy día los estudiantes secundarios han pasado a segundo plano. Un ejemplo de esto es que una de las pocas organizaciones que se pueden identificar en la coordinación y convocatoria de las protestas es el denominado movimiento "Unidad Social", que agrupa a más de 100 organizaciones sociales de muy distinta índole (desde sindicatos de trabajadores y camioneros hasta organizaciones feministas, pasando por organizaciones estudiantiles y ambientalistas).

Cabe mencionar también que dado que la crisis se extendió por todo el país se incorporaron diversos actores regionales que ampliaron el arco de representatividad de las protestas (pescadores artesanales, mineros del cobre, organizaciones mapuches, etc.). Por otra parte, hay que destacar que las protestas han tenido una convocatoria multclasista, abarcando desde actores del mundo popular y obrero hasta del ámbito de la clase media alta, lo cual se reflejó en Santiago en el hecho de que no estuvieron limitadas los barrios marginales, sino que, sorprendentemente, también se realizaron en

chilena y un centro de referencia. De sus aulas han egresado numerosos presidentes de la República y premios nacionales literatura, artes, ciencias, etc.

⁸ Por ejemplo, frente al alza del pasaje del Metro, el entonces ministro de economía J. A. Fontaine aseguró que esto no era un problema ya que, "se ha abierto (con el alza) un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja". Esto implicaba llegar al metro antes de las 7 am.

barrios acomodados de clase media alta como Las Condes, Providencia y Ñuñoa.

b) Diversidad de reivindicaciones: La pluralidad de actores se ha traducido en diversas reivindicaciones, algunas muy específicas (como por ejemplo reducción del cobro de peajes carreteros u oposición a la ley de educación parvularia), otras de carácter más estructural como la que apela al cambio del sistema previsional, hasta otras mucho más genéricas como el “no más abusos”. Esto permite entender el alto grado de convocatoria, que abarca a todos quienes tienen un reclamo contra el gobierno o el “sistema” en general. Pero a la vez también refleja la complejidad de consolidarlo políticamente, instalando metas u objetivos a lograr o interlocutores con quienes negociar, lo cual ha impedido una gestión “clásica” de la crisis.

c) Militarización: Uno de los aspectos que más influyó en la profundización de la crisis fue la declaración de “Estado de Emergencia” y la presencia de los militares en las calles a partir de la madrugada del sábado 19 de octubre (en los días siguientes hubo despliegue de casi 30 mil militares, en 15 de las 16 regiones del país). El gobierno lo justificó ante la magnitud de los ataques a las estaciones de metro, saqueos a comercios y supermercados, y la necesidad de proteger infraestructura esencial (agua potable, electricidad, etc.), presentando así una imagen de caos que habría sobrepasado completamente a las fuerzas de Carabineros⁹.

Al contrario de lo esperado por el gobierno, la militarización no pacificó la situación, sino que aumentó la crispación social y amplió el apoyo a las manifestaciones sumando mucha gente que reclamaba contra la represión, exigiendo el fin del “estado de emergencia” y retirar a los militares de la calle. Se puso en juego la memoria de la dictadura militar y se empezó a comparar al presidente Piñera con la figura de Pinochet. Además, la presencia militar coincidió con el aumento de los hechos de violencia (especialmente saqueos de supermercados y pequeño comercio) por lo que tampoco proporcionaron la imagen de seguridad que se esperaba, sino a pesar de los esfuerzos comunicacionales de los militares¹⁰, únicamente dejaron una imagen de mayor represión estatal.

d) Fragmentación de las coaliciones partidarias: Un último factor político a tomar en cuenta es la situación del sistema de partidos, marcado en el último tiempo por la alta fragmentación de la oposición y disputas dentro del oficialismo. La oposición está viviendo una compleja situación en que hay estrategias contrapuestas de posicionamiento ante las medidas emprendidas por el gobierno (especialmente en el caso de la reforma tributaria y penal) y, especialmente, una gran carencia de liderazgos fuertes. Todo lo cual ha llevado a un desperfilamiento de la oposición y a una incapacidad para vincularse a las manifestaciones callejeras, lo que ha generado un extraño

⁹ Desde medios de prensa y redes sociales se ha acusado a Carabineros de que en un momento de la noche abandonaron las calles, generando una sensación de caos e indefensión (<https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/rozas-sobre-ausencia-de-carabineros-en-saqueos-es-una-estrategia-de-persecucion-penal-inteligente/20191030/nota/3973120.aspx>).

¹⁰ En las primeras declaraciones del general Iturriaga, encargado de la Zona de Emergencia de la Región Metropolitana, hizo llamados a mantener la tranquilidad y normalidad. Incluso tomó distancia respecto a la afirmación del presidente Piñera de que la crisis era una “guerra”, declarando: “Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”. Tras lo cual el general perdió todo protagonismo comunicacional.

fenómeno de politización apartidaria¹¹. Por su parte, dentro de la alianza oficialista se está desarrollando una división entre dos grandes posturas (transversal a los partidos), la que se puede denominar "derecha social" (que critica al gobierno por su ceguera ante los problemas sociales y está dispuesta a generar cambios estructurales) y la de una "derecha doctrinaria, más conservadora respecto a la defensa del modelo neoliberal (que apuesta por medidas de beneficencia que no alteren las bases del modelo). El reciente cambio de gabinete ha reflejado la supremacía de este segundo grupo.

e) Violaciones a los Derechos Humanos: Según cifras del Ministerio del Interior (cuestionadas por algunas organizaciones de DDHH) el último balance del "estado de emergencia" es de 20 muertos (5 por acción directa de agentes del Estado); 473 civiles heridos (1.233 según el Colegio Médico), de los cuales 140 tienen lesiones oculares producto de la represión; 9.203 detenidos; 1.227 eventos "graves" (incendios, saqueos, y destrucciones de propiedad pública y privada, etc.). Además, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se han presentado 138 acciones judiciales contra personal militar y policial: 18 por violencia sexual y 92 por torturas. Esto se ha transformado en una de las principales críticas al gobierno, debilitando su discurso de represión contra "vándalos y delincuentes" y exponiendo al ex ministro del Interior (Andrés Chadwick) y al presidente Piñera a ser acusados constitucionalmente.

Las críticas al gobierno por la magnitud de las violaciones a los DDHH motivaron al gobierno a solicitar la presencia de una misión de verificación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que dirige la ex presidenta Michelle Bachelet. Hay discrepancias respecto a si esta solicitud es producto de una preocupación genuina del gobierno por investigar la violación a los DDHH o es solo una forma de involucrar a la ex presidenta en la crisis. Aun así la comisión ha llegado el 28 de octubre y su presencia se extendería hasta el 22 de noviembre.

1.3) La politización de la crisis

En un primer intento por responder a las demandas sociales, el presidente Piñera anunció el martes 22 una "Agenda Social" compuesta por una serie de medidas socioeconómicas, entre las que destacan un aumento del 20% en la Pensión Básica Solidaria¹², congelar el aumento de la tarifa de algunos servicios públicos (el pasaje de metro y de la electricidad), rebajas en el precio de medicamentos, establecer un "ingreso mínimo garantizado" de 350 mil pesos ¹³ (aproximadamente 432 euros), incremento del impuesto a la renta de los sectores de más altos ingresos, reducción de las dietas parlamentarias y de los altos sueldos públicos, entre otras. Sin embargo,

¹¹ Un ejemplo de esta distancia entre los partidos de oposición y la ciudadanía movilizada es la absoluta ausencia de banderas de partidos políticos en las manifestaciones. Las únicas banderas (además de la chilena) que tienen presencia son la mapuche y las de los clubes de fútbol (especialmente de los dos más populares: Colo-Colo y Universidad de Chile).

¹² Es un beneficio monetario mensual para las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional. Actualmente es de 110.201 pesos (unos 136 euros) y con el aumento llegaría a 132.241 pesos (unos 163 euros).

¹³ El sueldo mínimo para una jornada completa está fijado en 301.000 pesos (371 euros). La propuesta del presidente Piñera es que el Estado garantice los 350.000 pesos (432 euros) pagando la diferencia directamente al empleado. Aun así, este ingreso quedaría 86.000 pesos (unos 100 euros) por debajo de la línea de pobreza para un hogar promedio, fijada en 436.000 pesos (538 euros).

muchas de las medidas de esta "Agenda Social" (crear una Defensoría de las Víctimas o los proyectos pro infancia que reemplaza al Servicio Nacional de Menores y el de Sala Cuna Universal) en realidad ya eran parte de su programa de gobierno, por lo que se le acusó de que en realidad no estaba cediendo a las demandas sociales, sino que quería avanzar en su propio programa de gobierno. Esto generó la sensación de que la agenda solo buscaba bajar la tensión, pero no solucionar los problemas y, peor aún, terminaban favoreciendo los negocios de las empresas privadas. Esto no solo determinó el fracaso de la "Agenda Social" en bajar la tensión de la crisis (rechazada por un 70% de la población¹⁴), sino que también fortaleció la posición de quienes planteaban que las soluciones pasan necesariamente por cambios estructurales y, por ende, una nueva Constitución (la debilidad de los ofrecimientos de Piñera le dio fuerza a la discusión constitucional que había quedado prácticamente relegada al olvido desde fines de la derrota en la elección presidencial).

La marcha del día viernes 25, la mayor de la historia chilena y la forma pacífica en que se desarrolló, fue un golpe a la estrategia comunicacional del gobierno, ya que legitimó la representatividad de las demandas planteadas. Al punto que tanto el presidente como diversas figuras del gobierno y parlamentarios oficialistas aplaudieron la manifestación como expresión de la democracia chilena. Sin embargo, más allá de esta estrategia comunicacional el gobierno quedó completamente descolocado en su discurso de reducir las manifestaciones a simples actos vandálicos que debían ser reprimidos por la fuerza y se vio obligado a apostar por un relajamiento de la situación, anunciando el fin del "estado de emergencia".

La finalización del "estado de emergencia" (el domingo 27) y el retiro de los militares a sus cuarteles era una de las principales demandas en las manifestaciones y por parte de parlamentarios de la oposición. El gobierno pretendía con esto dar la imagen de normalidad y de empezar a "dar vuelta la página". Sin embargo, las manifestaciones han continuado con fuerza.

La realización de un cambio de gabinete (el lunes 28) también resultó un fracaso político ya que el gobierno no logró ampliar su base de apoyo ni dar la imagen de "unidad nacional" que en un principio trató de conseguir (por ejemplo, incorporando figuras vinculadas a la Democracia Cristiana (socialcristiano, de oposición). Tampoco se pudo incorporar muchos rostros nuevos al gabinete, ya que la mayoría de los cambios se realizaron a partir de personas que ya estaban en el gobierno, por lo que no hay una verdadera imagen de "renovación" que diera la idea de un gobierno distinto, con nuevas prioridades. Peor aún, se cometieron errores como trasladar a la vocera/portavoz del gobierno (una figura mal evaluada, pero muy cercana al presidente) al ministerio de deportes, lo que ha dejado la impresión de que el presidente estaba más preocupado de cuidar a su círculo cercano que de dar un giro sustancial su gabinete. Pero más importante aún, dejó la impresión de que pocas figuras del oficialismo (y menos aún de la oposición democristiana) estaban dispuestas entrar al gobierno, lo cual da cuenta de que el presidente se está quedando aislado.

¹⁴ Encuesta CADEM, realizada el 23 y 24 de octubre. Disponible en <https://www.cadem.cl/encuestas/estudio-no-302-25-de-octubre/>

Otro elemento importante a tener cuenta es que el 2020 es año electoral a nivel municipal y, por primera vez, de gobernadores regionales. En materia regional, si bien los análisis electorales que se han hecho hasta el momento no vaticinaban una victoria de la alianza oficialista (ganarían solo 6 de las 16 regiones), la crisis ha ahondado este mal panorama ya que muchos de los intendentes del gobiernos que iban a ser candidatos no pudieron renunciar a sus cargos por la crisis, por lo que el gobierno perdió a muchos de sus candidatos mejor posicionados¹⁵, como por ejemplo el caso de la intendenta de la Región Metropolitana Karla Rubilar, que se había perfilado como candidata y que ahora pasó a ser vocera/portavoz del gobierno. Por otro lado, el bajo apoyo al gobierno y a la figura del presidente Piñera puede conllevar la tentación de muchas candidaturas de desmarcarse de los lineamientos que provengan del gobierno y marcar distancia e incluso criticar al presidente.

ESCENARIOS A FUTURO

Si bien la crisis se originó y desarrollo fuera del ámbito de los partidos políticos, los que quedaron completamente descolocados ante la dinámica de la situación, con el paso de los días estos han empezado a procesar la crisis bajo una lógica político-institucional. Esto no significa que controlen los acontecimientos ni que la gente que se está manifestando lo haga bajo sus banderas, sino que se está empezando a procesar la crisis bajo los términos de un conflicto político institucional y articulando alianzas en relación a los intereses y programas de cada partido.

Ciertamente lo que está en el centro de la **discusión política es la viabilidad del modelo de desarrollo neoliberal**, y muchos actores políticos (tanto de partidos de izquierda como de movimientos sociales – Unidad Social-) se han articulado en torno a este objetivo, sin embargo, la bajada práctica de esta discusión se vincula de forma muy estrecha con cómo se prolonga en el futuro el gobierno del presidente Piñera. En este sentido, cobran importancia central dos procesos que se están en marcha. En primer lugar, la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick y, especialmente, en contra el presidente Piñera, por sus responsabilidades en la violación a los DDHH producto de la represión policial y militar. Del hecho de que finalmente se presenten o no estas acusaciones y cómo se resuelvan va a ser determinante no solo para el futuro del gobierno sino también de la derecha política como defensora del vigente modelo neoliberal¹⁶.

¹⁵ Si desean ser candidatos a las próximas elecciones municipales y de gobernador regional, que serán el 25 de octubre de 2020, las autoridades en ejercicio (ministros, subsecretarios, parlamentarios, etc.) debían dejar su cargo un año antes por lo que había plazo hasta el jueves 24 de octubre para dejar dichos cargos públicos.

¹⁶ Según la Constitución se puede acusar al Presidente de la República que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. La acusación, que debe ser entablada por no menos de diez ni más de veinte diputados (ya se han juntado 15 firmas). La Cámara deberá votar respecto a la procedencia de la acusación, lo que será aprobado por la mayoría de los diputados en ejercicio (es decir, 76 diputados). El Senado resuelve la acusación como

El segundo proceso político que va a ser determinante es el avance que pueden llegar a tener las iniciativas para generar **una nueva constitución política**. En este sentido, es clave el acuerdo al que llegaron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado¹⁷ de "iniciar el proceso constituyente". Si bien tanto la acusación constitucional como el proceso constituyente avanzan por carriles distintos, están estrechamente vinculados como condicionantes del futuro del gobierno del presidente Piñera. En este marco se pueden prever tres escenarios posibles que enfrenta el gobierno según como continúe esta crisis¹⁸:

a) La "caída" del gobierno: Si las manifestaciones continúan y la crisis sigue profundizándose en términos políticos y el gobierno se muestra incapaz de responder a las principales demandas surgidas durante la crisis (reforma al sistema de pensiones, mejora de la educación pública, rebajas en el costo de vida, acceso a la vivienda, etc.) y se queda sin proyecto político podría generarse un resquebrajamiento de los apoyos políticos, desatándose una lucha interna en el oficialismo entre sectores de la "derecha social" y sectores más conservadores. Por otra parte, el empresariado, que ha sido muy cauto y ha desplegado un discurso de "generosidad" social podría perder la paciencia con el gobierno y buscar otras alternativas políticas que les permita contar con una paz social necesaria para sus negocios. En este marco de debilidad y aislamiento del gobierno la oposición podría rearticularse y lograr los apoyos parlamentarios y sociales para que prosperen las acusaciones constitucionales y el país entre en un proceso constituyente en el cual alguna autoridad transitoria asuma la administración del Estado¹⁹.

b) Debilitamiento del gobierno: El gobierno intenta establecer un nuevo "relato" (programa) que tiende a generar un cierto "populismo de derecha" en el cual se intenta proteger la imagen presidencial mediante la realización de medidas sociales de corto alcance y sin reformas estructurales. Los resultados de esta apuesta son escasos aun cuando se renuncia de diversos proyectos del programa de gobierno, como la reforma tributaria (o al menos algunos de sus principales elementos), pero logra mantener el apoyo o "entendimiento" (resignación) de sus bases políticas más conservadoras de derecha (la Unión Demócrata Independiente y sectores del empresariado).

Por su parte, la oposición se mantiene desarticulada entre tres sectores, uno (Partido Comunista y Frente Amplio²⁰) y a la vez que busca radicalizar la crisis exigiendo la rápida instauración de una asamblea constituyente y presentando la acusación constitucional contra el presidente aun cuando no se tengan los votos necesarios (como un gesto moral), pero que también permite perfilarse con claridad en vista de las elecciones del próximo año. Un segundo sector (Partido Socialista y Partido Por la Democracia) renuncia a la

jurado, limitándose a declarar si el acusado es culpable o no. La declaración de culpabilidad debe ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio (es decir, 29 de los 43 senadores).

¹⁷ Iván Flores (de la Democracia Cristiana, socialcristiano y de oposición) y Jaime Quintana (del Partido por la Democracia, centro-izquierda y de oposición).

¹⁸ Hay que tener en cuenta que estos escenarios siempre son esquemáticos por lo que detalles y actores concretos pueden variar.

¹⁹ Si en este momento el presidente fuera destituido, debería asumir el ministro del Interior (como vicepresidente) y llamar a elecciones en un plazo de 10 días para elegir un reemplazante para el periodo que resta de esta administración.

²⁰ Agrupación de diversos partidos de izquierda que eran oposición al gobierno de Michelle Bachelet.

acusación constitucional del presidente e intenta aprovechar la crisis para impulsar la nueva constitución (abriéndose a distintas modalidades) como única posibilidad de generar las reformas que se exigen en las manifestaciones.

El tercer sector (Democracia Cristiana y Partido Radical), rechaza la acusación constitucional contra el presidente y plantea una postura más "pragmática" de conseguir beneficios sociales concretos. En este marco, el gobierno establece un pacto de gobernabilidad con el sector más "moderado" de la oposición (Democracia Cristiana y Partido Radical) que le permita al presidente Piñera evitar la acusación constitucional y terminar su mandato sin mayores problemas políticos, pero renunciando a dejar un gran "legado" histórico y poniendo en cuestión la posibilidad de que el oficialismo logre ganar las elecciones presidenciales de 2021.

c) Fortalecimiento del gobierno: Las protestas continúan, pero paulatinamente pierden apoyo por los actos de violencia y funciona la estrategia del gobierno de aguantar hasta que el movimiento social se desgaste y reprimir a los actores más violentos. Con esto mejora la imagen del presidente y el gobierno logra reestablecer su programa bajo un nuevo "relato" de la urgencia de mejoras sociales concretas sin perder tiempo en reformas constitucionales. Esto marca la derrota de las tesis de la "derecha social" y un predominio de la derecha más conservadora. Con esto la alianza de derecha logra ordenarse internamente para aprovechar el éxito gubernamental en las elecciones del próximo año.

La oposición queda completamente desarticulada y es incapaz de coordinarse para ninguna acusación constitucional con cierta posibilidad de éxito y tampoco ponerse de acuerdo en el mecanismo para generar la nueva constitución. Los partidos se centrarán en recriminarse los errores estratégicos de cada uno de los sectores, los sectores más "moderados" buscarán desmarcarse de los más "radicalizados". Si bien tras el receso político del verano, se empezará a buscar algún elemento que les permita establecer una alianza mínima con vista a que en las elecciones del próximo año la derecha no arrase, es difícil que se logre una gran alianza de toda la oposición.

Con esto se debilita la capacidad de la oposición de bloquear las reformas del gobierno ni mucho menos incorporar transformaciones significativas en el vigente modelo neoliberal. Es más, el gobierno aprovecha la desarticulación de la oposición y asume que es una oportunidad para acelerar y profundizar diversas reformas que estaban "congeladas", por ejemplo, reponiendo algunos aspectos de la reforma tributaria que estaba impulsando hasta el comienzo de la crisis.

CONCLUSIÓN

Se observa una diversificación de estrategias en la movilización social, pasando solo de las masivas marchas ciudadanas (que invariablemente terminaban en choques violentos con la policía) a implementar numerosos

“cabildos ciudadanos²¹” tanto a nivel de barrios como también en otros ámbitos (de artistas, de funcionarios públicos e incluso de los clubes del fútbol²²).

El escenario más probable hasta el momento es el de “Debilitamiento del gobierno”. La suspensión de las cumbres internacionales que se iban a realizar en noviembre y diciembre es un golpe fuerte al programa del presidente Piñera quien se ve muy debilitado. Sin embargo, la oposición aun no es capaz de presentar un frente unificado que le permita canalizar las movilizaciones sociales e imponerle al gobierno una asamblea constituyente.

Por otra parte, es prácticamente imposible que prospere la acusación constitucional contra el presidente Piñera dado que en el Senado se necesitarían los votos de algunos partidos de la derecha. Incluso si se llegara a presentar se necesitarían todos los votos de los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, y la Democracia Cristiana.

²¹ Son una instancia de participación social en diversos espacios públicos (plazas, escuelas, estadios, etc.) que tiene como objetivo convocar a la ciudadanía para discutir, informar y presentar propuestas para cambios sociales a partir de una reflexión colectiva. Su organización no depende de la administración pública ni de los partidos políticos sino que surge desde la misma ciudadanía autoconvocada.

²² <http://www.lahora.cl/2019/10/invitados-colo-colo-cabildo-abierto/>